

85/0

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R.N. N°633-2010

SAN MARTIN

✓ Lima, catorce de julio de dos mil diez.-

VISTOS: el recurso de nulidad

interpuesto por los procesados Max Henry Ramírez García, Abner Eduardo Ramírez García, Fernando Marín Vásquez y César Alberto Morey Rengifo, contra la sentencia de fecha veintinueve de diciembre de dos mil nueve, de fojas siete mil ciento diecisiete; interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Biaggi Gómez; de conformidad en parte con el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Penal; y **CONSIDERANDO: Primero:** Que, el procesado Abner Eduardo Ramírez García, fundamenta su recurso a fojas siete mil doscientos dos, alegando que: **i)** no se ha probado la existencia del hecho delictuoso ni su responsabilidad penal respecto al delito de corrupción activa de funcionarios, pues no existe ninguna prueba objetiva que permita constatar la existencia de cada uno de los elementos que configuran el delito inculcado; **ii)** ninguno de sus co acusados, lo ha mencionado o ha sindicado como autor de los hechos delictivos de corrupción activa de funcionarios; **iii)** que el Colegiado Superior no ha podido sustentar de manera individualizada en que ha consistido el acto de corrupción que se le atribuye, ni siquiera ha mencionado los medios probatorios utilizados. Por otro lado, el encausado Max Henry Ramírez García, fundamenta su recurso de nulidad a fojas siete mil doscientos diecisiete, señalando que: **i)** el argumento de la sentencia condenatoria, al alegar que Gerardo Morey Rengifo fue visitado tres veces por Rioja Díaz para recibir dinero y que le sea entregado, esto, en el juicio oral no se ha logrado determinar que Morey Rengifo responde al nombre de Germán y no de Gerardo, en tanto que, más adelante, señala que Rioja Díaz fue a recibir dinero a su nombre de una persona de

apellido Moura; **ii)** como Presidente del Gobierno Regional de San Martín no, tenía atribuciones ni obligación de firmar o girar cheques, ya que este de acuerdo al ROF y el MOF es de exclusiva responsabilidad del Gerente de Administración y del Tesorero, por lo tanto, la imputación de haber entregado dos cheques a favor del grifo San Ignacio Sociedad Anónima Cerrada, sin garantía de carta fianza, carece de fundamento; **iii)** que se le ha condenado como cómplice primario, no obstante, que no se ha demostrado quien es el autor del delito, con lo cual se ha transgredido la lógica jurídica, pues no se ha probado que su persona haya co - adyuvado para que se firme o gire algún cheque y ordenado el pago; asimismo, el informe de verificación de denuncia efectuada por la Contraloría General de la República, la única conclusión que llegó es que se ha incurrido en omisión de funciones, lo cual también ha quedado desvirtuado; **iv)** respecto al delito de cohecho, la única prueba de cargo es la declaración de su co acusado Jorge Rioja Díaz, quien, sin ninguna prueba, afirma que por ordenes del recurrente haber recibido de parte del señor Germán Morey la suma de diez mil nuevos soles, y que lo giró a favor de su esposa ya que se trataba de un préstamo personal, porque aún no le pagaban sus remuneraciones; asimismo, tampoco se ha demostrado la afirmación de haber recibido las sumas de diez mil dólares americanos y cuarenta mil nuevos soles en la ciudad de Tarapoto; **v)** señala que, el Colegiado Superior, ha aceptado la conformidad sobre la acusación fiscal efectuada por Gerardo Vigil Ramírez la misma que no cumple con los criterios establecidos en el Acuerdo Plenario numero cinco -dos mil ocho / CJ - ciento dieciséis, de fecha tres de setiembre de dos mil ocho, en el que refiere que el acusado debe acogerse a la conformidad al inicio del juicio oral; sin embargo, se admitió cuando había transcurrido la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R.N. N°633-2010

SAN MARTIN

cuarta sesión del juicio oral; finalmente, el recurrente refiere que para imponerle la pena de tres años de pena privativa de libertad efectiva no se ha tomado en cuenta que tenía trabajo fijo y domicilio conocido; por lo que, solicita se declare nula la sentencia y reformándola se le absuelva de los cargos incriminados. Por su parte, César Alberto Morey Benito, fundamenta su recurso de nulidad, a fojas siete mil doscientos cuarenta y cuatro, alegando que: I) se ha violentado el principio de unidad del juicio oral, porque se inició sin advertir los efectos en el auto de enjuiciamiento con el cual no se notificó al tercero civil responsable, CG Contratistas Generales e Inversiones San Ignacio Sociedad Anónima Cerrada; dándose inicio al juicio oral sin contar con la presencia de todos los procesados y aceptándose la conformidad del procesado Vigil Ramírez a pesar de que ya se estaba interrogando a los demás procesados; además, no se resolvió de manera oportuna el pedido del señor Fiscal de acumulación del proceso dos mil tres – cero doscientos treinta y seis y cuando se hizo no hubo fundamento fáctico ni jurídico; y que, al inicio del juicio oral se obligó a Rioja Díaz que obtenga asesoría legal en una hora y luego su conformidad sin un conocimiento previo de su alcance; II) que, en el desarrollo de la sentencia no existe prueba que permita una sanción en su contra siendo la única tesis que invoca el Colegiado Superior para establecer su responsabilidad en el delito de cohecho pasivo propio, es que colaboró con la entrega de dinero efectuado a su co sentenciados Max Henry Ramírez García y a través de Jorge Isaac Rioja Díaz; III) respecto a la entrega de adelanto de dinero sin contar con la carta fianza respectiva, fue luego de haberse otorgado la buena pro y este se encuentra conforme con las Normas de Contrataciones del Estado, además, la carta fianza se le entregó a Rioja Díaz con fecha veinticuatro de

febrero de dos mil tres, por lo que, el patrimonio del Estado estaba suficientemente cautelado; y, **iv)** finalmente, con arreglo al Convenio Interinstitucional suscrito para la ejecución del proyecto, los fondos que han sido objeto de presunta defraudación, le pertenecen a Petroperú y no al Gobierno Regional de San Martín quien ha sido considerado como agraviado, error que debe ser corregido, siendo así, solicita que se declare la nulidad de la sentencia impugnada y reformandola se le absuelva de los cargos incriminados. Por último, Fernando María Vázquez fundamenta su recurso de nulidad a fojas siete mil doscientos cincuenta y tres, refiriendo que: **i)** el sentenciado Ramírez García en colaboración con Torres Mori fueron quienes arrendaron la empresa Inversiones San Ignacio Sociedad anónima Cerrada y ejecutaron los términos del contrato, tomando recién conocimiento de tal vinculación, cuando en forma irregular Jarold Ramírez García lo comisionó para acudir a las oficinas del proyecto con el objeto de que reciba dos cheques y luego concurra al Banco de Crédito del Perú a hacerlos efectivos y se los entregue al aludido acusado, siendo por tanto circunstancial su participación en los hechos; **ii)** Que, no se ha acreditado que su persona haya participado en la suscripción de los cheques ni en el trámite de los mismos, más aún, si la Sala Superior ha concluido que esta imputación recae en otros sentenciados. **Segundo:** Que, fluye de la acusación fiscal a fojas cinco mil setecientos cuarenta, que se les imputó a los sentenciados que entre los meses de noviembre de dos mil dos a febrero de dos mil tres, cuando fue elegido Presidente del Gobierno Regional de San Martín el procesado Max Ramírez García, asumió la continuación de la ejecución del convenio que el ex CTAR suscribió con Provias Nacionales y Petroperú Sociedad Anónima con la finalidad de efectuar la rehabilitación y el mantenimiento de la

7
89

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R.N. N°633-2010

SAN MARTIN

carretera Tarapoto - Yurimaguas por un monto de cinco millones quinientos mil nuevos soles, efectivizado por Petroperú Sociedad Anónima, en el mes de noviembre de dos mil dos, una transferencia a favor del Gobierno Regional de San Martín, como núcleo ejecutor de la obra, la suma de dos millones veintiocho mil ciento cuarenta y tres nuevos soles con cuarenta y un céntimos, utilizando la suma de un millón trescientos mil nuevos soles, de los cuales específicamente la cantidad de setecientos mil nuevos soles, designando a sus co procesados Jorge Mario Díaz -jefe del proyecto- y a Gerardo Vígil Ramírez -administrador- con quienes llegó ha concertar, para apropiarse de dicho caudal, con tal propósito contaron con la participación activa de los procesados Jarold y Abner Ramírez García -hermanos del citado Presidente del Gobierno Regional de San Martín- y con los procesados Wilson Torres Mori y Fernando Marín Vásquez, representante del Grifo San Ignacio Sociedad Anónima, Cerrada con quienes simularon un contrato de ejecución de combustible consistente en quince mil galones de petróleo diesel y dos mil ochocientos cuarenta y dos punto setenta galones de gasolina de ochenta y cuatro octanos, por un valor de ciento treinta y nueve mil cuatro nuevos soles, contrato que se suscribió sin que la proveedora presente la carta fianza y sin observarse las normas de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, sumado a que ni siquiera dichos carburantes fueron totalmente suministrados, precisándose que el nombrado Marín Vásquez, no tenía ningún tipo de representación o mandato para celebrar dicho contrato en nombre del grifo mencionado. Del mismo modo, con la finalidad de proveerse de material agregado, los procesados Max Ramírez y Jorge Rioja, funcionarios del Gobierno Regional de San Martín, concretaron con el procesado César Morey, Gerente de la empresa C.G. Ingenieros Contratistas Generales

90/

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R.N. N°633-2010

SAN MARTIN

Sociedad Anónima Cerrada, para el suministro y traslado de material de afirmado en la cantidad de diecinueve mil seiscientos ochenta y tres punto treinta y seis metros cúbicos a cambio de la suma de seiscientos sesenta mil ciento setenta y nueve nuevos soles con ochenta y nueve céntimos, entregándole por tal motivo un adelanto de ciento veinte mil nuevos soles y la buena pro a dicha empresa; del mismo modo, sin el cumplimiento obligatorio de la carta fianza y sin observarse las normas que regulan la contratación estatal, no se ha cumplido con la entrega de los insumos por el importe del monto dinerario entregado como adelanto; asimismo, el encausado Max Ramírez en complicidad con su cónyuge Eleana Castillo Sánchez - Navarrete desmaron fondos del Gobierno Regional de San Martín en la compra y adquisiciones de productos ajenos a los fines de la institución en gastos particulares de alimentación como han sido las compras efectuadas a las tiendas Tito Market, Puro Amayo Sucesores, Restaurante Patarashca, Tabacalera del Oriente; y, finalmente, se atribuye a los procesados Jarold Ramírez García, Abner Eduardo Ramírez García, Wilson Medardo Torres Mori, Fernando Marin Vásquez, representantes y patrocinadores de Inversiones San Ignacio Sociedad Anónima Cerrada y César Alberto Morey Rengifo, representante de CG Ingenieros Contratistas Generales Sociedad Anónima Cerrada, que con la finalidad de que dichas empresa resulten ganadoras de la buena pro en el proceso de selección para el suministro de combustible y material afirmado al proyecto carretero, entregaron diversas sumas de dinero al procesado Max Henry Ramírez García por intermedio de su co procesado Jorge Isaac Rioja Díaz. **Tercero:** Que, el literal "e" del numeral veinticuatro del artículo dos de nuestra Constitución Política del Perú contempla el principio de presunción de inocencia y lo hace en términos similares al artículo ocho de la

28
94

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R.N. N°633-2010

SAN MARTIN

Convención Americana sobre Derechos Humanos *«Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad»*. Se trata pues, de un derecho que tiene arraigo en la legislación nacional e internacional. Si la inocencia se presume, *contrario sensu*, la culpabilidad debe demostrarse (entendida la culpabilidad como el juicio que permite imputar a una persona un hecho antijurídico); en ese sentido, le corresponde al titular de la acción penal acreditar a través de medios probatorios directos o indirectos (indicios) no sólo las circunstancias en que se cometió el delito, sino también, que el sujeto imputado es el responsable del mismo, pues a partir de dichos elementos probatorios se podrá producir en el proceso penal la prueba que servirá de sustento al Órgano Jurisdiccional para una sentencia condenatoria. **Cuarto:** Que, respecto a la responsabilidad del sentenciado César Alberto Morey Rengifo, en relación al argumento señalado en su recurso de nulidad, de no haberse notificado a las empresas C.G. Ingenieros Contratistas Generales Sociedad Anónima Cerrada y el Grifo San Ignacio Sociedad Anónima Cerrada, es necesario advertir que dichas personas jurídicas no han sido comprendidas como terceros civilmente responsables, por tanto, no resultaba pertinente su notificación al no ser parte del proceso penal, respecto a lo alegado en que se dió inicio del juicio oral, sin contar con la presencia de todos los procesados, resulta necesario recordar que el último párrafo del artículo trescientos veintuno del Código de Procedimientos Penales, dispone que: "Si en la instrucción figurasen acusados en cárcel y acusados libres la audiencia se realizará con los que concurren...", en consecuencia, resulta acorde con la norma procesal que en los procesos que se sigue con más de un imputado, es admisible dar inicio al juicio oral, aún cuando se cuente con la

92

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R.N. N°633-2010

SAN MARTIN

2

conurrencia de solo uno de ellos; a lo alegado, respecto al momento procesal en que debe darse la conformidad que da lugar a la conclusión anticipada del juicio oral, regulado en el artículo cinco de la Ley número veintiocho mil ciento veintidós, si bien es cierto, en ella no se hace referencia a los procesos con reos ausentes o a aquellos procesos con varios procesados en los que se ha iniciado el juicio oral con sólo alguno de ellos y luego se incorpora algún otro procesado ausente como lo es en el presente caso; sin embargo, resulta necesario realizar una interpretación teleológica de dicha norma, es decir, ahondar por la finalidad de la "conformidad", la cual se constituye en un beneficio para el imputado que reconoce los hechos antes de que se de inicio al periodo probatorio por haberle generado en la administración de justicia un ahorro de tiempo y recursos que habría ocasionado la realización del juicio oral; acorde a lo señalado, resultaría contrario a dicha finalidad y al principio de igualdad reconocer la posibilidad de acogerse a dicho beneficio procesal en los procesos que se sigue en contra de varios procesados, sólo a aquellos que hayan estado presentes al inicio del juicio oral y no a los que estuvieron ausentes, por lo tanto, la exigencia de aplicación del instituto de la conformidad al "inicio del juicio oral" debe entenderse en el momento en que se da inicio el juicio oral para cada uno de los imputados, es decir, en caso de los procesados ausentes cuando éstos se incorporan a un juicio oral en trámite o cuando se da inicio a un nuevo juicio oral conforme a lo señalado en el artículo trescientos dieciocho del Código de Procedimientos Penales; que en cuanto al argumento del imputado a la falta de medios de prueba que sustenten los cargos en su contra, ello no resulta cierto en principio porque existe la imputación clara, directa y sin contradicciones de su co sentenciado Jorge Rioja Díaz quien,

gm

8

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R.N. N°633-2010

SAN MARTIN

refiere que el hermano del sentenciado, Germán Morey Rengifo (el hecho de que el testigo haya sido mencionado en la sentencia con otro nombre, Gerardo, debe ser considerado como un error material en la redacción de la sentencia impugnada que debe ser corregida, pues el sentenciado Rioja Díaz claramente lo menciona con el nombre de Germán Morey, así como en su declaración instructiva de fojas dos mil doscientos noventa y tres y la reitera en el juicio oral a fojas cinco mil cuatrocientos noventa y uno, donde señala que fue quien le entregó diversas sumas de dinero para su co procesado Ramírez García, siendo que no existe ningún elemento de carácter subjetivo, odio, envidia o rivalidad que pusiera en cuestión dicha imputación, además se encuentra corroborado con otros elementos objetivos como el depósito de dinero a nombre de la esposa de su co procesado Ramírez García; asimismo, en la declaración instructiva a fojas dos mil doscientos sesenta y dos y dos mil doscientos noventa y tres, Jorge Isaac Rioja Díaz se ratifica en todos sus extremos sobre su declaración brindada en la comisión del Congreso de la República que obra a fojas ciento cincuenta y ocho, señaló que fue a la casa del señor Germán Morey, porque se realizó un contrato de aproximadamente seiscientos treinta mil nuevos soles a nombre de CG Ingenieros – propiedad de César Morey, cuya carta fianza se le ha entregado CG Ingeniero, y por eso entregaron la comisión de diez mil nuevos soles y diez mil dólares americanos. Se debe agregar, que el testigo Jorge Isaac Rioja Díaz, ha señalado reiteradas veces que en el momento que Germán Morey le entregó el dinero, éste no tenía vínculo con la Región, siendo que el dinero entregado fue dispuesto por César Morey, por la adjudicación de la buena pro del contrato cero dos – dos mil tres Gobierno Regional por transporte de material de afirmado (fojas mil ochocientos noventa y nueve, firmado por Max

Henry Ramírez García (presidente), Jorge Isaacs Rioja Díaz(jefe de proyectos) y por César Alberto Morey Rengifo. **Quinto:** Que, respecto a la responsabilidad del sentenciado Max Henry Ramírez García, al señalar en su recurso de nulidad que la sentencia hace referencia a diez mil nuevos soles que le habría entregado el encausado Germán Morey a su co sentenciado Rioja Díaz, si bien es cierto se hace referencia de ello en la sentencia; sin embargo, dicho argumento no tiene mayor incidencia en la determinación de los cargos imputados al sentenciado Ramírez García pues la entrega de los diez mil nuevos soles y diez mil dólares americanos, son los que configuran el injusto de conecheo propio; que en relación, a la entrega de cheques a los proveedores, los cargos en contra del procesado Ramírez García, no es por el hecho de haberlos entregado de manera personal, sino de haberse interesado en su entrega, tal como refieren sus coimputados Rioja Díaz y Vigil Ramírez, conforme obra en la declaración instructiva de fojas dos mil ochenta y cinco, resulta por ello que los cargos en su contra no son en calidad de autor sino de cómplice primario en el delito de colusión; y en cuanto a que se le condenó en calidad de cómplice primario sin que en el proceso se haya determinado la existencia de un autor en el delito de colusión, ello no resulta cierto, pues el procesado Gerardo Vigil fue precisamente sentenciado en calidad de autor mediante sentencia que obra a fojas cinco mil seiscientos nueve, además de ello en el noveno considerando de la sentencia impugnada se hace referencia a la remisión de copias al Ministerio Público respecto a la responsabilidad de los terceros que se habrían coludido con el procesado; y, finalmente, con relación al argumento de que la sindicación de su co sentenciado Rioja Díaz no se encuentra corroborado con otro elemento probatorio, tampoco resulta cierto, pues obra en autos el voucher del depósito realizado,

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R.N. N°633-2010

SAN MARTIN

en el Banco de Crédito a nombre de su esposa, no siendo razonable de que dicho monto se trataría de un préstamo pues de ser así no sería lógico que el depósito lo haga el procesado Rioja Díaz con otros nombres y apellidos; y, además la entrega de la suma de diez mil dólares americanos se encuentra corroborada con la manifestación del testigo Luis Enrique Alayo Martínez que obra a fojas dos mil doscientos once. **Sexto:** Que, respecto al procesado Fernando Marín Vásquez, se ha establecido que éste era representante conjuntamente con el procesado Jarold Ramírez García, de la Empresa Inversiones San Ignacio Sociedad Anónima Cerrada, quien firmó el contrato número cero uno - dos mil tres, con el Gobierno Regional de San Martín, para ser proveedor de combustible de quince mil galones de petróleo diesel dos y mil ochocientos cuarenta y dos galones de gasolina de ochenta y cuatro octanos a quien en forma irregular el presidente del comité especial permanente de adjudicación directa y de menor cuantía Juan del Águila Cabrera, le otorgaron la buena pro, no obstante de no contar con la carta fianza, siendo que no han cumplido con lo establecido por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, siendo esto así, se le dio por adelantado de dicho contrato, correspondiente a la suma de ciento treinta y nueve mil cuatrocientos nuevos soles, y que para cuyo fin intervino Jarol Ramírez García -hermano del presidente regional-, sin embargo, como se observa del estudio de los actuados, esta empresa no cumplió con la totalidad de lo pactado en el contrato, logrando apropiarse y beneficiarse con dinero del proyecto de dicha Región; por lo que, se tiene que, ha existido una activa participación de este procesado, ya que, se ha logrado que la empresa que representaba sea beneficiada con las adquisiciones de los bienes en concurso y la obtención de la buena pro. **Sétimo:** Que, respecto al

94/

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R.N. N°633-2010

SAN MARTIN

procesado Abner Eduardo Ramírez García, se ha llegado a determinar de los actuados, una activa participación en el delito que se le imputa, ya que, ha realizado concertaciones fraudulentas y defraudación al patrimonio estatal, precisamente aprovechando el vínculo sanguíneo que tenía como el Presidente de la Región, se ha concertado con su co encausados Jarold Ramírez García y Fernando Marín Vásquez, para simular un contrato de adquisición de combustible a favor de la empresa san Ignacio Sociedad Anónima Cerrada, negocio que se suscribió sin el cumplimiento obligatorio por parte de la proveedora referida a la carta fianza; asimismo, se presentó a la oficina de Gerardo Vigil Ramírez -gerente regional de administración- quien le llevó dos cheques para que los firmara -correspondiendo a la empresa san Ignacio Sociedad Anónima Cerrada-, y realizar el cobro respectivo, y al indicarle Vigil Ramírez que no se había cumplido con las documentaciones respectivas conforme a ley, ya que faltaba la carta fianza, señaló que, no se preocupara ya que habían hablado con su hermano -Presidente Regional- y que lo iban a regularizar la carta fianza después; asimismo, agrega que cuando llamó a Abner Eduardo Ramírez, para que regularice la carta fianza, éste le respondió " no te preocupes, es un asunto que ya se va esclarecer y esto ya conoce Max", conforme obra a fojas doscientos treinta y nueve; siendo así, y conforme lo sostiene la recurrida, se ha llegado a determinar su participación en el delito imputado, por lo que, este extremo de la sentencia no debe sufrir variación alguna por encontrarse arreglada a ley. Por estos fundamentos: declararon **NO HABER NULIDAD** en la sentencia de fecha veintinueve de diciembre de dos mil nueve, de fojas siete mil ciento diecisiete en el extremo que condenó a Max Henry Ramírez García como cómplice primario, por el delito contra la Administración

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R.N. N°633-2010

SAN MARTIN

Pública - colusión desleal y como autor del delito de cohecho pasivo propio a tres años de pena privativa de libertad efectiva, que computados desde la fecha de ingreso al penal vencerá el veintiocho de diciembre de dos mil doce en agravio del Gobierno Regional de San Martín y Petro Perú Sociedad Anónima. **NO HABER NULIDAD**, en la sentencia en el extremo que condenó Fernando Marín Vásquez, Abner Eduardo Rodríguez García y Cesar Alberto Morey Rengifo como autores del delito contra la Administración Pública - corrupción activa de funcionarios, a tres años de pena privativa de libertad suspendida en el plazo de dos años bajo determinadas reglas de conducta, en agravio del Gobierno Regional de San Martín y Petroperu Sociedad Anónima; y, fijó en veinte mil nuevos soles el concepto de reparación civil que los sentenciados deberán pagar solidariamente a favor de los mencionados agraviados, con lo demás que al respecto contiene y es materia del recurso; y lo devolvieron. Interviene el señor Juez Supremo Santa María Morillo por licencia del señor Juez Supremo Neyra Flores.

S.S.

RODRÍGUEZ TINEO

BIAGGI GÓMEZ

BARRIOS ALVARADO

BARANDIARÁN DEMPWOLF

SANTA MARÍA MORILLO

Elin Guzmán Olaver

Barandiarán

SE PUBLICO CONFORME A LEY

MIGUEL ANGEL SOTELO TASAYCO
SECRETARIO(e)
Sala Penal Transitoria
CORTE SUPREMA

BG/crch

